

INTERPONE RECURSO DE REVOCATORIA LEY 5480.-

Excma. Cámara en Documentos y Locaciones - Sala III.-

Juicio: "**Banco Empresario de Tucumán Cooperativo Limitado c/ Ramal Telefonía S.R.L. y otro s/ Cobro Ejecutivo**", Expte. 11974/02.-

ENRIQUE SANCHO MIÑANO (h), por derecho propio, comparezco ante V.E. y respetuosamente digo:

I.- OBJETO: Que vengo en tiempo y forma a interponer recurso de revocatoria (art. 31 Ley 5480) en contra de la regulación de honorarios practicada por sentencia N° 272 de fecha 18/11/2021, por violación al art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación, a los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, y a los arts. 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, la regulación resulta descalificable como acto jurisdiccional por haber vulnerado el art. 38, último párrafo,¹ de la Ley 5480 al haberse regulado por debajo del valor mínimo de una consulta escrita.

II.- FUNDAMENTOS

A) Honorarios devengados en 2006 - Agravios

En fecha 16/08/2006, se dicta sentencia ordenando que se lleve adelante la ejecución seguida por BANCO EMPRESARIO DE TUCUMAN COOP. LTDO. en contra de RAMAL TELEFONIA S.R.L y de CARLOS ALBERTO ALDERETE MONTALDO hasta hacerse al acreedor íntegro pago del capital reclamado en autos, o sea la suma de TREINTA Y CUATRO MIL PESOS (\$ 34.000) con más sus intereses, gastos y costas.

En contra de dicha sentencia, el Sr. Carlos A. Alderete Montaldo -con mi patrocinio letrado- interpone recurso de apelación, el que es concedido por decreto de fecha 7/09/2006. Expresados los agravios y

¹ "En ningún caso los honorarios del abogado serán inferiores al valor establecido para una (1) consulta escrita vigente al tiempo de la regulación".

corrido el traslado, por proveído de fecha 8/02/2007, se elevan los autos a la Excma. Cámara.

Como se podrá apreciar, con mi trabajo profesional cumplido íntegramente entre el 16/08/2006 y el 8/02/2007, ingresaron a mi patrimonio los honorarios devengados por mi actuación en el recurso de apelación (arts. 1 y 51 de la Ley 5480).

En el año 2006 la unidad de valor “consulta escrita” (art. 38 de la ley 5480), era de \$300 (valor de la consulta escrita establecida por el Colegio de Abogados de Tucumán para el período 14/02/2005 a 21/02/2007). Se adjunta copia simple de los valores históricos de consultas.

Pasando el monto por el que prosperó la ejecución (\$34.000) a su equivalente en consultas escritas para mantener el real valor de los honorarios devengados en el año 2006 (conf. art. 772 del Código Civil y Comercial), y aplicando exactamente las mismas escalas y porcentajes utilizados por V.E. en sentencia regulatoria del 18/11/2021, arroja el siguiente valor al año 2006 en que fueron devengados los honorarios:

- Año 2006: Base regulatoria \$34.000 (conf. sentencia del 16/08/2006) / \$300 (valor de la consulta escrita en el año 2006) = **113,33 consultas escritas.**
- Base año 2006: 113,33 (consultas escritas) – 10 % (art. 62 LA) = 101,99 x 8 % (art. 38 LA) = 9,15 x 25 % (art. 51 LA) = **2,03 consultas escritas.-**

Es decir que al año 2006 en que fueron devengados mis honorarios, y por lo tanto incorporados a mi patrimonio, el valor real de los mismos (utilizando la misma base, los mismos porcentajes y la misma escala), era equivalente a 2,03 consultas escritas, que actualizados a la fecha sería igual a:

- **\$40.000 (valor actual de la consulta escrita) x 2,03 consultas escritas = \$81.200.**

Sin embargo, en la resolutive II.b de la sentencia de fecha 18/11/2021 se me regularon \$39.413, es decir, que 15 años después de devengados los honorarios, la regulación resulta menos del valor de 1 consulta escrita, lo que significa un menoscabo patrimonial inaceptable de más del 50%:

- Sentencia de fecha 18/11/2021: Base: \$ 2.189.518,63 – 10 % (art. 62 LA) = \$ 1.970.660,65 x 8 % (art. 38 LA) = \$ 157.652,85 x 25 % (art. 51 LA) = \$39.413,21 (menos de 1 consulta escrita).

En consecuencia, dicha regulación del 18/11/2021 me causa un evidente agravio a mi derecho humano y constitucional a la justa retribución del trabajo y a mi derecho de propiedad (arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional), por no resultar completa e integral,² al no mantener la equivalencia de las prestaciones, desconociéndose que se trata de una deuda de valor (art. 772 del Código Civil y Comercial) por honorarios devengados en el año 2006 que -en dicho año- eran equivalentes a 2,03 consultas escritas.

A todo evento, la regulación también infringe el art. 38 de la Ley 5480 por regular por debajo del mínimo, es decir, menos de 1 consulta escrita, lo que resulta hasta ofensivo para la dignidad de un profesional luego de 20 años de juicio.

B) Violación de derechos adquiridos por omisión de mantener constante el valor real de la retribución del trabajo

Ha dicho la Corte Suprema de la Nación que **“toda regulación de honorarios es un acto declarativo y no constitutivo de un derecho (cfr. Fallos: 296:723)”**, por tanto **“la regulación judicial solo agrega un reconocimiento -y cuantificación- de un derecho preexistente a la retribución del trabajo profesional (Fallos: 314-481)”** (voto del Dr. Zaffaroni en caso de Fallos: 335:1348).

² Montoro-Ballesteros, Alberto, *Supuestos filosófico-jurídicos de la justa remuneración del trabajo*, Universidad de Murcia, Murcia, 1980, pp. 82-110.

También ha dicho la Corte de la Nación que **“la actualización del monto nominal no hace la deuda más onerosa que en su origen, sino que sólo mantiene el valor económico real frente al paulatino envilecimiento de la moneda y asegura una adecuada contraprestación de los servicios profesionales. Una interpretación distinta significaría que el procedimiento regulado por los arts. 49 y 50 de la ley 21.839, a pesar de estar situados éstos en el capítulo titulado ‘protección del honorario’, llevara un resultado diverso del propósito tenido en cuenta por el legislador al establecerlo”** (caso “Chiavaro, Armando y otros c/ Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne, Derivados y Afines”, publicado en *Fallos*: 307:894. En igual sentido *Fallos*: 313:1469; 308:89; 308:1058).

La omisión de mantener constante el real valor de mis honorarios devengados en el año 2006, no solo no aseguran una adecuada contraprestación de los servicios profesionales, sino que además generan desprotección judicial que impacta en forma directa sobre mis derechos adquiridos (arts. 25 y 21 de la CADH).

En efecto, la falta de mantenimiento del valor real del crédito, desconociéndose que se trata de una “deuda de valor” por ser – justamente- un crédito de naturaleza alimentaria, vulnera mi derecho de propiedad y la garantía de protección judicial reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana ha desarrollado en su jurisprudencia *“un concepto amplio de propiedad que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales apropiables o como objetos intangibles, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. Asimismo, la Corte ha protegido, a través del artículo 21 convencional, los derechos adquiridos, entendidos como derechos que se han incorporado al patrimonio de las personas”*.³

Con cita del caso “Cinco Pensionistas Vs. Perú”,⁴ recuerda la Corte IDH que en el mismo *“declaró una violación del derecho a la propiedad por la afectación patrimonial causada por el incumplimiento de*

³ Sentencia del 31/8/2012, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 220.

⁴ párrs. 90-121.

sentencias que pretendían proteger el derecho a una pensión. El Tribunal señaló que, **desde el momento en que un pensionista cumple con los requisitos para acogerse al régimen de jubilaciones previsto en la ley, éste adquiere un derecho de propiedad sobre el monto de las pensiones.** Asimismo, declaró que el derecho a la pensión que adquiere dicha persona tiene “efectos patrimoniales”,⁵ los cuales están protegidos bajo el artículo 21 de la Convención”. En nota al pie agrega la Corte IDH que “al respecto, en el citado caso, el Tribunal declaró que al haber cambiado arbitrariamente el monto de las pensiones que venían percibiendo las víctimas y al no haber dado cumplimiento a las sentencias judiciales emitidas con ocasión de las acciones de garantía interpuestas por éstos, el Estado violó el derecho a la propiedad reconocido”.⁶

De igual manera, desde el momento en que un abogado realiza su trabajo, y cumple con los requisitos previsto en la ley 5480, éste adquiere un derecho de propiedad sobre el monto de los honorarios.

El monto de los honorarios devengados y sus “efectos patrimoniales” protegidos por el art. 21 de la CADH, en tanto se trata de un crédito de naturaleza alimentaria, debe mensurarse objetivamente en una moneda constante (conf. Corte Interamericana de Derechos Humanos “Abrill Alosilla y otros vs. Perú”, sentencia de 4 de marzo de 2011, y “Loayza Tamayo vs. Perú”, sentencia de 27 de noviembre de 1998, reparaciones y costas). Y la Ley 5480 brinda un parámetro objetivo como unidad de valor para mensurar los honorarios en la fecha en que fueron devengados: el valor de la “consulta escrita” establecida por el Colegio de Abogados de Tucumán (art. 38 de la Ley 5480).

Como es sabido, la consideración de los honorarios profesionales como retribución del trabajo es el fundamento para otorgarles la protección y garantía de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución de la Nación Argentina, garantía que no sólo cubre “el valor abstracto de la retribución profesional sino que extiende su escudo protector al valor real y actual porque si la demasía puede configurar una confiscación, contemplada la cuestión desde el ángulo de quién debe pagar honorarios,

⁵ En nota al pie número 365 la Corte IDH cita los casos “Cinco Pensionistas” Vs. Perú, párr. 103, y Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú, párr. 85

⁶ Sentencia del 31/8/2012, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 221, nota 366.

el exceso contrario supondría admitir que por la vía de una retribución mermada se arribe a una estimación confiscatoria del patrimonio profesional, lo que, a no dudarlo, supondría inferir un menoscabo a la tarea cumplida por el letrado, e incluso a la propia Administración de Justicia (CS. El Derecho, T 72-553; SCBA en DJBA, T 112, pág. 261; Cámara 1º La Plata, causa 191.229, reg. sent. 242/84 del 2779/1984)".⁷

Según pacífica doctrina de la **Corte Suprema de la Nación** **"los honorarios regulados al abogado constituyen una deuda de valor y no una deuda de dinero"**.⁸

En otro precedente, la **Corte Suprema de la Nación** expresó que **"el principio de 'afianzar la justicia' y la garantía de la retribución justa (Preámbulo y art. 14 de la Constitución Nacional) exigen que la equivalencia de las prestaciones recíprocas responda a la realidad de sus valores y a la finalidad de cada una de ellas; situación equitativa que resulta alterada cuando por culpa del deudor moroso la prestación nominal a su cargo ha disminuido su valor real, su poder adquisitivo, en relación a sus fines propios de naturaleza alimentaria, por influencia de factores que no dependen del acreedor"**.⁹

También dijo la **Corte de la Nación** que **"si no se calcula el monto de las indemnizaciones laborales sobre la base de pautas reales, el deterioro del poder adquisitivo del salario acaecido durante el lapso que media entre la finalización de un ciclo de trabajo y el momento del despido -en la especie 8 meses-, no sólo beneficia indebidamente a quien con su conducta genera aquella situación, sino que importa un manifiesto desmedro patrimonial para el acreedor en términos que lesionan el derecho de propiedad y los derechos atinentes a una retribución justa y a la protección contra el despido arbitrario, consagrados, respectivamente, por los arts. 14, 17 y 14 bis de la Constitución Nacional"**.¹⁰

⁷ GASTÓN BARTHE, *Los honorarios mínimos y la dignidad del abogado. Regulación por debajo de la escala. Un agravio contra la jerarquía profesional*, 17 de septiembre de 2012, www.infojus.gov.ar Id SAIJ: DACF120170.

⁸ *Fallos*: 308:2060, "Nebhen, Camilo c/ Banco de Jujuy". En igual sentido *Fallos*: 308:2015 y 308:2441.

⁹ *Fallos*: 312:377, caso "Suárez, Manuel R. c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba".

¹⁰ *Fallos*: 306:940, caso "Jáuregui, Manuela Yolanda c/ Unión Obreros y Empleados del Plástico".

Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina en su artículo 772¹¹ reconoce expresamente la licitud de los mecanismos de actualización para las deudas de valor.

Igualmente, el Congreso de la Nación Argentina por Ley 27.423 de Honorarios de Abogados (art. 19),¹² como casi todas las leyes de honorarios del país, establecieron un mecanismo de actualización para mantener los honorarios en moneda constante.

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la retribución del trabajo recibe especial protección:

Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el Artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.

¹¹ “ARTICULO 772.- Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección”.

¹² “ARTÍCULO 19.- Institúyese la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) para los honorarios profesionales de los abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia, la que equivaldrá al tres por ciento (3 %) de la remuneración básica asignada al cargo de juez federal de primera instancia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación suministrará y publicará mensualmente, por el medio a determinar por dicho Alto Tribunal, el valor resultante, eliminando las fracciones decimales, e informará a las diferentes cámaras el valor de la UMA...”

La **Declaración Universal de los Derechos Humanos**

dice:

Artículo 23. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

La **Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre** dice lo siguiente:

Artículo XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo.

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.

A su vez, el **Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales** dice lo siguiente:

Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

La Organización Internacional del Trabajo en la Recomendación 135, expresó:

Punto V. Reajuste de Salarios Mínimos

11. Las tarifas de los salarios mínimos deberían ajustarse de tiempo en tiempo para tomar en cuenta los cambios en el costo de la vida y otras condiciones económicas.

Entonces, en este aspecto, existe un incumplimiento de la autoridad judicial de proteger el valor real de la retribución al trabajo personal (art. XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre),¹³ cuyas pautas de cuantificación (mínimas y máximas) estaban determinadas por ley a la fecha en que fueron devengados los honorarios,¹⁴ sobre una base regulatoria establecida por el art. 39 de la Ley

¹³ Artículo XIV. – Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.

¹⁴ Ley de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores N° 5480 de la Provincia de Tucumán: “Art.51.- Por las actuaciones correspondientes a segunda o ulterior instancia, se regulará en cada una de ellas del veinticinco por ciento (25%) al treinta y cinco por ciento (35%) de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia. Si la apelación prospera en todas sus partes a favor de apelante, el honorario de su abogado se fijará en el treinta y cinco por ciento (35%)”.

Según cita la Corte IDH en nota 83 del párr. 83 de la sentencia dictada en el caso *Abrill Alosilla y otros vs. Perú* (sentencia de 4 de marzo de 2011, fondo, reparaciones y costas), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que “los órganos de la Convención han indicado constantemente que el ingreso que ha sido devengado, constituye una “posesión” en los términos del artículo 1 del Protocolo 1 de la Convención”. ECHR, *Case of Lelas v. Croatia*, Judgment of 20 may 2010, para. 58, *Case of Bahçeyaka*

5480, y por lo tanto, incorporada a mi patrimonio (conf. arts. 25.1., 25.2.c y 21 de la CADH y doctrina de la Corte IDH, Caso Abrill Alosilla y otros vs. Perú, sentencia de 4 de marzo de 2011, fondo, reparaciones y costas, párrs. 82-85.).

La naturaleza de deuda de valor de los honorarios y la necesidad de mantener actualizada la equivalencia de las prestaciones, desde la fecha en que los honorarios fueron devengados hasta el momento del efectivo pago, fue reconocida expresamente por el Congreso de la Nación al sancionarse la Ley 27.423 de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal.¹⁵

“ARTÍCULO 51.- La regulación de honorarios deberá contener, bajo pena de nulidad, el monto expresado en moneda de curso legal y la cantidad de UMA que éste representa a la fecha de la resolución. El pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de UMA contenidas en la resolución regulatoria, según su valor vigente al momento del pago”.

Y la realidad de los valores, comparando ambas regulaciones expresadas en consultas escritas como unidad de valor (*“valor establecido para una consulta escrita vigente al tiempo de la regulación”*—art. 38 Ley 5480—), pone en evidencia que no se ha mantenido la equivalencia de las prestaciones en sentencia del 18/11/2021, violándose en consecuencia mi derecho de propiedad (arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional y art. 21 de la CADH).

Entonces, la Ley Nacional de Honorarios de Abogados N° 27.423 debe, por analogía, tenerse en cuenta para interpretar la oscuridad o insuficiencia de la Ley Provincial de Honorarios N° 5480, respecto al mecanismo para mantener la equivalencia de las prestaciones en moneda

v. Turkey, Judgment of 13 July 2006 para. 34 y Case of Schettini and others v. Italy (dec.), Judgment of 9 November 2000, para. 1.

¹⁵ “ARTÍCULO 51.- La regulación de honorarios deberá contener, bajo pena de nulidad, el monto expresado en moneda de curso legal y la cantidad de UMA que éste representa a la fecha de la resolución. El pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de UMA contenidas en la resolución regulatoria, según su valor vigente al momento del pago”.

constante a lo largo del proceso judicial (conf. art. 2 del Código Civil y Comercial de la Nación¹⁶ y art. 31 del Código Procesal Civil de Tucumán).¹⁷

Máxime teniendo en cuenta que **la Ley 5480 de Honorarios de Abogados de la provincia de Tucumán tiene referencias expresas a una unidad de medida constante: *el valor de una consulta escrita al tiempo de la regulación* (arts. 38, 64 y 67 de la Ley 5480).** Y que además, el art. 39 dice que debe actualizarse el monto de la base regulatoria por la “**desvalorización monetaria**”. Si bien este artículo remite a un método prohibido por la Ley 25.561, como es la indexación, V.E. –teniendo en cuenta la finalidad protectoria del derecho de propiedad de la actualización por desvalorización monetaria prevista en la Ley 5480– en cumplimiento de su deber de administrar justicia debe recurrir a un método de actualización permitido por el artículo 772 del Código Civil y Comercial¹⁸ como, por ejemplo, el que se infiere del espíritu del art. 38 de la Ley 5480, u otros establecidos en leyes análogas como la Ley Nacional Nº 27.423 o la Ley 14.967 de la Provincia de Buenos Aires,¹⁹ y expresarse en unidades arancelarias o “*en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico*” (conf. art. 772 del Código Civil y Comercial).

En este punto creemos pertinente destacar que en la Honorable Legislatura de Tucumán ingresó en fecha 26/09/2019 un

¹⁶ ARTICULO 2º.- Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.

¹⁷ Art.31.- ADMINISTRAR JUSTICIA. Es deber fundamental de los jueces administrar justicia en los términos que en este Código se determinan, sin que puedan negarse a ello so pretexto de silencio, oscuridad e insuficiencia de las leyes.

¹⁸ ARTICULO 772.- Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección.

¹⁹ Ley 27.423 de Honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la justicia nacional y federal: Artículo 51.- La regulación de honorarios deberá contener, bajo pena de nulidad, el monto expresado en moneda de curso legal y la cantidad de UMA [Unidad de Medida Arancelaria] que éste representa a la fecha de la resolución. El pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de UMA contenidas en la resolución regulatoria, según su valor vigente al momento del pago.

LEY 14.967 de Honorarios de abogados y procuradores de la provincia de Buenos Aires: ARTICULO 24: La regulación de los honorarios se efectuará en su equivalente a la medida Jus, debiendo así mantenerse, hasta el momento del efectivo pago, a excepción de lo normado en el artículo 54 inc. b).

Art. 54: (...) Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.

proyecto de ley de modificación de la Ley 5480.²⁰ Este proyecto de ley en su artículo 19 dice lo siguiente:

“Art. 19. - Toda regulación judicial de honorarios deberá ser practicada mediante resolución fundada, con cita de la disposición legal que aplique y de las pautas del artículo 15 que se han tenido en cuenta.

Se establece con la denominación "Jus- la unidad arancelaria de honorario profesional, que será equivalente al valor de una consulta escrita establecida de común acuerdo por el Colegio de Abogados de Tucumán y el Colegio de Abogados del Sur.

La base regulatoria y toda regulación de honorarios se expresarán, bajo pena de nulidad, en su equivalente en unidades arancelarias Jus.

El pago será total y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de pesos o moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de unidades Jus contenidas en la resolución regulatoria, según su valor vigente al momento del pago efectivo, total y cancelatorio.

En ningún caso el juez del proceso podrá violar, bajo pena de nulidad absoluta, los mínimos legales establecidos en esta ley, los cuales revisten carácter de orden público.

La regulación que no respete los mínimos legales hará incurrir al juez en falta por mal desempeño...”

En los fundamentos del proyecto de ley se expresa, con cita de *Fallos*: 134:57; 166:133; 184:621; 187:352; 234:717 de la Corte Suprema de la Nación, que “*el art. 19 debe considerarse como una interpretación auténtica de que todos los honorarios, no solo la regulación mínima equivalente a "x" consultas escritas, constituyen una deuda de valor en la Ley 5480, y por lo tanto podían —y de aprobarse este proyecto, deberán— regularse en su equivalente en consultas escritas. En consecuencia la conversión de "todas" las regulaciones en su equivalente en unidades arancelarias Jus (valor de la consulta escrita), incluso las*

²⁰ Expediente 217-PL-19 <https://www.legislaturadetucuman.gob.ar/pdfs/expedientes/217-PL-19.pdf>

regulaciones en las que se aplican las escalas arancelarias del art. 38 y concordantes, es el mecanismo para mantener constante la equivalencia de las prestaciones” (el subrayado nos pertenece).

En nota al pie de los fundamentos del proyecto de ley, se cita jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia de San Martín de Los Andes, Neuquén, Sala 2, sentencia del 28 de febrero de 2014, dictada en el **caso “Rossi, Alberto Artemio y otro c/ Dehais, José s/ Interdicto de recobrar”**, donde se expresó que: *“También cabe descartar la pretendida violación a la Ley Arancelaria que el apelante le atribuye a la resolución apelada, por un supuesto apartamiento de la finalidad tenida en cuenta por el legislador al instituir el JUS. Sin perjuicio de ser certero que **“la unidad de honorario” otorga al Juez un parámetro objetivo al que acudir cuando deba regular honorarios mínimos, en ningún pasaje de la Ley 1.594 existe una prohibición de utilizarla en supuestos en que puedan fijarse los emolumentos aplicando las escalas arancelarias** del artículo 7° y concordantes”* (Magistrados: Dardo Walter Troncoso - María Julia Barrese, Id SAIJ: FA14070129).

Se agrega en los fundamentos del proyecto de ley que ***“en efecto, la actual Ley 5480 -desde su promulgación el 20/04/1983- siempre tuvo como unidad arancelaria “el equivalente al valor” de una consulta escrita para regular honorarios mínimos, es decir, su consideración como deuda de valor y el mecanismo adecuado para mantenerlos constantes. Sin embargo, las regulaciones en las que se aplican las escalas arancelarias del art. 38 y concordantes, no se expresan en el “equivalente al valor” de la consulta escrita a la fecha de la regulación, a pesar de que no solo no está prohibido por la ley sino que se infiere de ella como un método para mantener constante la equivalencia de las prestaciones hasta la fecha de su efectivo pago, en tanto la consulta escrita es actualizada periódicamente por el Colegio de Abogados. Esta omisión de convertir la regulación en consultas escritas, en las regulaciones en las que se aplican las escalas arancelarias, redundando en grave menoscabo al derecho constitucional de propiedad de los abogados y procuradores de la provincia”***.

Es decir, que los propios legisladores de la Provincia de Tucumán reconocen expresamente la grave violación al derecho de propiedad que significa no mantener la base regulatoria y las regulaciones de honorarios en su equivalente “*consultas escritas*”, desde la fecha que fueron devengados hasta la fecha del efectivo pago.

III.- CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, puedo afirmar con fundamento en la doctrina citada de la Corte Interamericana y de la Corte de la Nación, que la falta de protección judicial en resguardo de la integridad del crédito de honorarios, afectó mis derechos adquiridos sobre remuneraciones devengadas equivalentes al valor real y actual de 2,03 consultas escritas que habían ingresado a mi patrimonio en el año 2006, razón por la cual la sentencia del 18/11/2021 que me regula menos del valor real y actual de 1 consulta escrita, resulta violatoria del art. 38 de la Ley 5480, del art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación, de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución de la Nación, del art. XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y de los arts. 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.


IV.- PETITORIO: Por lo expuesto, solicito:

- 1) Se tenga por presentado en tiempo y forma el recurso de revocatoria previsto en el art. 31 de la Ley 5480, en contra de la sentencia regulatoria de honorarios de fecha 18/11/2021.
- 2) Se corra traslado al Sr. Carlos Alderete Montaldo.
- 3) Se oficie al Colegio de Abogados de Tucumán a los efectos que remita el histórico de valores de consultas verbales y escritas, y fechas de vigencias establecidas por el H. Consejo Directivo, desde el año 1990 hasta la actualidad.
- 4) Oportunamente, se haga lugar al recurso revocándose la sentencia del 18/11/2021 y se me regulen los honorarios devengados en 2006 en su equivalente en consultas escritas a dicho año, debiendo así

mantenerse, hasta el momento del efectivo pago (conf. art. 772 del Código Civil y Comercial, y doctrina citada de la Corte Interamericana y de la Corte de la Nación).

5) A todo evento, teniendo razón probable para litigar, se impongan las costas por su orden (art. 105 del Cód. Procesal Civil).

Proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA.



ENRIQUE SANCHO-MIRANO (h)
ABOGADO
M. 3950 - L° J - F° 934
M.F. T° 96 - F° 937

HISTORICO DE VALORES DE CONSULTAS

1990

Consulta verbal: A 130.000

Consulta escrita: A 250.000

.....
08/05/2002

Consulta verbal: \$ 100.

Consulta escrita: \$ 250.

14/02/2005

Consulta verbal: \$ 150.

Consulta escrita: \$ 300.

21/02/2007 (vigencia 22/02/07)

Consulta verbal: \$ 200.

Consulta escrita: \$ 450.

19/03/2008 (vigencia 25/03/2008)

Consulta verbal: \$ 300.

Consulta escrita: \$ 600.

18/03/2009 (vigencia 25/03/2009)

Consulta verbal: \$ 400.

Consulta escrita: \$ 800.

03/03/2010 (vigencia 03/03/2010)

Consulta verbal: \$ 500.

Consulta escrita: \$ 1000.

02/03/2011 (vigencia 14/03/2011)

Consulta verbal: \$ 650.

Consulta escrita: \$ 1300.

08/02/2012 (vigencia 15/02/2012)

Consulta verbal: \$ 750.

Consulta escrita: \$ 1500.

06/03/2013 (vigencia 11/03/2013)

Consulta verbal: \$ 900.

Consulta escrita: \$ 1800.

01/08/2013 (vigencia 01/08/2013)

Consulta verbal: \$ 1000.

Consulta escrita: \$ 2000.

12/02/2014 (vigencia 01/03/2014)

Consulta verbal: \$ 1250.

Consulta escrita: \$ 2500.